



**UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA**



CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO SOCIAL

**COSTA RICA
AGOSTO 2013**

Elaboración

Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura

Autores

Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez

Fuentes

La Nación, Diario Extra, Crhoy.com

Costa Rica

Cronología del conflicto social

Agosto 2013¹

Jueves 1

La Asociación Comunal “La Voz del Pueblo” denuncia al subdirector del Laboratorio de Aguas del AyA ante el Colegio de Ingenieros Químicos por supuestas omisiones en el informe de potabilidad de agua del cantón de Bagaces. Las y los vecinos señalan que en el informe se obvia la presencia de 32 parámetros físicos-químicos para el análisis de la potabilidad del agua. Además, según reporta el diario digital crhoy.com, en relación con la medición del arsénico, se encontró que cuatro de los valores son iguales o superiores al rango máximo admisible. No obstante, la organización denuncia que el informe del AyA establece que los niveles de potabilidad del agua de Bagaces son positivos, por lo que no es necesario que se suministre agua por cisterna.

La CICR presenta ante el gobierno y medios de comunicación, una propuesta de la Política Industrial 2030, la cual contiene tres ejes: Innovación y Competitividad, Empleo y Desarrollo Humano y Ambiente y Desarrollo. Además, la CICR plantea la eliminación -a largo plazo- del monopolio de combustibles y la apertura del mercado eléctrico, así como la reestructuración institucional del MOPT, del CONAVI, del CNC, del INCOP y de la JAPDEVA.

Viernes 2

Durante una asamblea, las universidades, públicas y privadas, que imparten la carrera de Medicina, organizadas en la ACOFEMED, votan unánimemente contra la huelga declarada por las y los médicos internos que laboran para la CCSS. El mes anterior, este grupo de médicos protestó en demanda del pago del incentivo de 36% del salario de un médico general que estipula la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. Helia Betancourt, presidenta de la ACOFEMED, indica que las medidas de presión implementadas no cuentan con el apoyo de las autoridades. Asimismo, sostiene que la decisión de las y los médicos internos de no realizar las guardias médicas durante las noches, los fines de semana y los días feriados no es respaldada por la ACOFEMED.

Vecinas y vecinos de comunidades del oeste de Cartago realizan un llamado de alerta ante el aumento drástico en las tarifas del servicio de autobús de la empresa Autotransportes San José-San Juan de Tobosi Sur, S. A., la cual brinda el servicio en las comunidades de Tobosi, Jericó, Guadarrama, San Juan Norte, San Juan Sur, Río Conejo y otros. Las y los vecinos señalan que los aumentos tarifarios les afectan en su economía familiar, por lo que han decidido caminar o viajar en transportes colectivos. Por esta razón, varias comunidades de la zona se han reunido y han

¹ Como citar este documento: Alvarado, A. y Martínez G. 2013. Costa Rica Cronología del Conflicto Social Agosto 2013. San José: IIS-UCR. Disponible en: http://iis.ucr.ac.cr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=102&Itemid=407

protagonizado bloqueos, protestas y reuniones con autoridades del gobierno para dar solución al problema, conformando un movimiento al que han llamado “Ollas vacías por tarifas”. Asimismo, Verónica Hernández, vecina de Corralillo de Cartago, señala que varias y varios vecinos se reunirán en la semana para decidir si toman medidas.

Ante el reclamo de vecinas y vecinos de comunidades del oeste de Cartago por el aumento drástico en las tarifas del servicio de autobús, la Red Solidaria Nacional critica los cálculos de la ARESEP. Olman Bonilla, miembro de la red, indica a crhoy.com, que la autoridad reguladora aceptó los datos aportados por la empresa sobre la demanda de pasajeros, e ignoró los existentes en el estudio técnico realizado en 2008 por el CTP para estas rutas. Ana Carolina Mora, vocera de la ARESEP, indica que el cálculo tarifario considera los costos operativos, nueva inversión, la cantidad de buses, los recorridos, la distancia y la demanda. Además, señala que la empresa no recibió un ajuste individual durante muchos años.

El Comité para la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís de Grecia solicita una reunión con autoridades de la CCSS con el objetivo de exigir la cobertura 24 horas de las especialidades médicas en el hospital. Deivis Ovares, integrante del comité señala que “es nuestra única petición, ya que actualmente las especialidades en el hospital San Francisco de Asís se cubren hasta las 4:00 p.m. después de esa hora se aplica un sistema de disponibilidad, con el cual estamos en desacuerdo”. Asimismo, el comité señala que ya han recolectado cerca de 8000 firmas solicitando la extensión de la cobertura del servicio de especialidades médicas, por lo cual planean presentarlas a la gerencia médica de la CCSS. No obstante, el encuentro entre las partes fue cancelado y pospuesto por la CCSS para el próximo 6 de agosto, pero con la Gerencia Médica.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, expresa que su organización se opone al alza en las tarifas de autobús promovida por la ARESEP, las cuales entrarán a regir a finales del mes de setiembre. Dicha alza, que rondaría entre los ¢5 y los ¢65, según información de Diario Extra, afectaría principalmente a las familias de la clase trabajadora, sostiene Vargas. Para este, el alza en las tarifas de autobús se “comería” buena parte del aumento salarial del segundo semestre, aprobado para las y los trabajadores del sector público y privado. Agrega que “...se reafirma nuestra tesis en materia de salarios mínimos: una cosa son los reajustes semestrales por costo de vida, cada vez más insuficientes [...] y otra, muy distinta, una elevación sustancial de carácter estructural en sus pisos, de forma tal que tengan realmente un aumento en el poder de compra”.

Sábado 3

Durante una visita en el edificio de Diario Extra, dos integrantes del Comité de Vecinos Pro-Puente de las comunidades de Victoria, San Antonio y Roxana, en Pococí, provincia de Limón, denuncian que el CONAVI se niega a construir el puente sobre el río Santa Clara. Según señalan, durante la construcción de la ruta 810, estas comunidades quedaron aisladas debido a que el puente sobre este río no se construyó, obligando a las y los vecinos de estas comunidades a utilizar un puente de hamaca construido por la empresa bananera de la zona. Asimismo,

denuncian que la Sala Constitucional les dio la razón sobre un recurso de amparo interpuesto por el comité, y obligó al CONAVI a construir el puente, en un plazo máximo de seis meses. Pese a esto, el CONAVI les informó, sin que mediarán estudios técnicos, que solo construiría un puente peatonal, para sustituir el existente.

Las asociaciones de desarrollo de San Joaquín, Coopevega, Moravia, San Vito de Cutris y Llano Verde de Pocosol del cantón de San Carlos, Zona Norte del país, anuncian protestas por el mal estado de las vías en sus comunidades. En una carta enviada a la presidenta de la República las organizaciones dan plazo al gobierno para solucionar la problemática. En la carta señalan que: “si al 5 de agosto no hay acciones concretas en nuestros caminos, nuestras comunidades se reservan el derecho de tomar acciones, hechos que causarán problemas tanto a su gobierno como a nuestra región, pero que pareciera será la única manera de que se resuelva nuestra difícil situación”.

Comunidades de Llano Bonito, Sector Nueve, Santa Rosa de La Rita, Aguas Frías de Roxana, La Curia, San Luis de Jiménez y Parismina, todas del cantón de Pococí de la provincia de Limón, convocan a una marcha para exigir a la municipalidad y al gobierno que tome acciones contra la expansión del monocultivo de piña en el cantón. Además, las comunidades denuncian la contaminación del agua por la aplicación de químicos en los cultivos de piña, situación que ha afectado el suministro de agua en los acueductos de diversas comunidades del cantón.

Dirigentes comunales de la provincia de Guanacaste señalan estar satisfechos con la manifestación del 25 de julio, en el marco de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya. Wilmar Matarrita, uno de los líderes comunales, señala que la baja en la convocatoria en las protestas se dio por problemas de organización y falta de recursos. En relación con el cambio de la agenda de la presidenta Laura Chinchilla en los actos protocolarios en el marco de la celebración, para no enfrentar las protestas, Salvatore Coppola, del Foro de Guanacaste expresa que, “eso fue una estrategia de un Ministerio de Propaganda porque un Ministerio de Comunicación se sentaría y enfrentaría a un grupo social para comunicarse en doble vía. Un ministro o estrategia de propaganda lo que hace es cambiar el horario de aparición de la presidenta y hacer aparentar que nada está pasando”.

Alrededor de 300 familias toman en posesión, una finca de 40 hectáreas propiedad de la empresa transnacional Ston Forestal. Nancy Valverde Rivera, líder del grupo de ocupantes indica: “tenemos una primera lista de 140 familias. Muchos de ellos no tienen cómo pagar un alquiler de al menos ₡100.000; muchos de ellos han vivido en zonas de riesgo por años y esta finca ha estado desocupada [...] Dicen que estas tierras tienen dueño, pero por años han estado abandonadas. Si no peleamos con dignidad, los extranjeros vienen y se adueñan de esto”.

Domingo 4

La Asociación Rescate de Valores Patrióticos inicia una campaña para autofinanciar el proceso de demanda que entabló meses atrás contra el Estado costarricense y la Concesionaria Autopistas del Sol, debido a las irregularidades

que se presentaron en la concesión de la ruta 27 San José-Caldera. La asociación señala que pronto iniciarán la venta de una serie de billetes de ₡1.000, ₡2.000, ₡5.000 y ₡10.000 colones que han denominado “billetes de prósperos”. Benito Dessard, miembro de la organización, señala que “todo esto tiene altos costos y la venta de estos ‘billetes prósperos’ nos podrá ayudar a seguir adelante y mejorar nuestra capacidad de acción para el beneficio del interés de todos. Estarán listos para ofrecer al público a partir del 5 de agosto”.

Las y los abogados integrantes del Foro Nacional, anuncian que pedirán al TCA un llamado de atención a la Presidenta Laura Chinchilla, por la forma en que el CNC continúa manejando el tema de las negociaciones para indemnizar a la empresa OAS por el finiquito del contrato de construcción de la carretera San José- San Ramón, a pesar del proceso judicial existente.

Lunes 5

Vecinas y vecinos de comunidades del cantón de Pococí marchan desde las instalaciones del MAG en Pococí al edificio municipal, para protestar contra el monocultivo de piña en la zona. Por esta razón solicitan a la municipalidad y a las autoridades gubernamentales que tomen las acciones correspondientes para detener la expansión de las plantaciones piñeras. María Olivia Calvo Solano, vecina de la zona explica: “no queremos más extensión piñera, nos están dañando mucho, nos están perjudicando el ambiente. El agua está contaminada, hay pozos artesanales con bromacil. Es algo devastador, los químicos que se están utilizando son sumamente dañinos, es una siembra exagerada de piña, vienen arrasando con todo lo que puedan”. Por otra parte, representantes del comité organizador indican que las municipalidades de ambos cantones declararon en 2012, la suspensión de la expansión de las plantaciones piñeras hasta que no se estableciera científicamente los efectos de los agroquímicos involucrados en la producción de piña, en el agua que consumen las comunidades. Sin embargo, un recurso de amparo interpuesto por la CANAPEP y declarado con lugar por la Sala Constitucional, anuló la decisión de las municipalidades.

Un grupo de empresarios dedicados a la distribución de gas, y trabajadoras y trabajadoras de estas empresas, marchan hasta la Asamblea Legislativa para solicitar que se mantenga el “llenado universal” de los cilindros de gas y que se apruebe el proyecto de ley para regular a las empresas envasadoras. De acuerdo con Tatiana Baldí, secretaria de la ANDIGAPA; René Castro, ministro de Ambiente y Energía, emitió una directriz para que la “llena” de los cilindros se realice únicamente por las empresas propietarias de los cilindros. Esto, sostiene Baldí, promovería un monopolio en favor de la empresa Tropigas que actualmente controla el 80% del mercado. Luego de la marcha, las y los manifestantes se mantienen varias horas concentrados frente al parlamento y luego sostienen una reunión con un grupo de diputadas y diputados, sin embargo, no se informa de acuerdos.

Este día, las y los vecinos de las comunidades de la Zona Sur ubicadas en la milla fronteriza, se concentran frente a la Asamblea Legislativa para demandar la aprobación del proyecto de Ley no. 16.657, para la titulación de tierras en la milla

fronteriza. El mes anterior, este mismo grupo marchó desde Paso Canoas, en la frontera con Panamá, hasta la capital, como medida de presión para que las y los diputados aprueben el proyecto de ley, sin embargo, esto no sucedió luego de que un grupo de las y los diputados enviara el proyecto a consulta de la Sala Constitucional. Édgar Gutiérrez, uno de los representantes de las y los vecinos, indica que permanecerán el tiempo necesario hasta que el proyecto sea votado en primer debate.

Vecinos de Castelmare de Pital y Los Almendros de Cutris, en San Carlos, protestan ante el mal estado del puente sobre el río Tres Amigos, el cual conecta a ambas comunidades con Pital de San Carlos. Las y los vecinos señalan que este puente fue construido hace 35 años, y lleva 5 años de estar cerrado para el tránsito de vehículos, por lo cual tanto los peatones se ven afectados por su seguridad, así como las y los agricultores no pueden sacar a la venta sus productos. El vocero municipal, Walter Hernández, indica que el MOPT trabaja en el diseño del puente. Agrega que la construcción ronda los ₡500 millones de colones y que la municipalidad no tiene los recursos.

El SINDEU recolecta firmas para evitar que la CCSS adjudique la administración de los EBASIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión a un oferente privado. Asimismo, el SINDEU anuncia que harán una marcha el próximo 22 de agosto desde la sede Rodrigo Facio de la UCR al edificio central de la CCSS, en Avenida Segunda, San José, con el objetivo de entregar dichas firmas a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, como adjunto a una carta de petición para que revoque la adjudicación de los servicios de los equipos de salud a la empresa privada. Roberto Herrera, miembro del sindicato afirma: “nuestra iniciativa busca mantener el carácter público de los EBASIS, los cuales venían siendo administrados por la UCR y generó empleo a 400 personas. Estamos con toda una campaña para generar un movimiento nacional y echar abajo la concesión de los EBASIS a las empresas privadas de la salud”.

Las y los trabajadores de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, agremiados en la ANEP, dan un plazo de 22 días al alcalde municipal para que se mejoren las condiciones laborales de las y los empleados. El dirigente sindical Heiner Díaz señala que “No se le da el equipo, ni las herramientas adecuadas al personal, pese a que no se tienen las condiciones adecuadas de trabajo, no se les pagan horas extras, hay gente que no está nombrada en propiedad, se nombran personas por servicios profesionales, ellos están preocupados que se van a quedar sin trabajo”. Por esta razón, la administración municipal se compromete a entregar para el 23 de agosto una propuesta para el establecimiento del salario escolar, y el sindicato a presentar un borrador de proyecto para una política de salud ocupacional. Asimismo, señalan que de no cumplirse los acuerdos irán a huelga indefinida.

Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Aguirre anuncian un paro de labores para el día 6 de agosto, con el motivo de exigir seguridad y estabilidad laboral. La dirigente sindical Iris Cervantes indica: “tenemos un grupo de al menos 20 personas que tiene entre 2 y 4 años de laborar en la institución y ahora pretenden iniciar un proceso para dejarlos sin trabajo, ya que aducen que el

nombramiento en administraciones pasadas se realizó sin cumplir algunos requisitos [...] También está el tema de la Policía Municipal, la cual pretenden eliminar y tampoco sabemos cómo le van a pagar a esas personas, ya que indican que no hay dinero. Además el municipio denunció irregularidades con la actual convención colectiva, la cual pretenden derogar, incluso se han realizado gestiones para sentarnos a negociar pero no se ha recibido respuesta alguna”.

Martes 6

Se realiza una reunión entre representantes del Comité Cívico de Motociclistas, apoyados por la ANEP, con Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del INS, y dos subgerentes de la institución. Durante la reunión se discuten posibles fórmulas para definir un monto menor en el pago del SOA. Albino Vargas, secretario general de la ANEP, indica que se discute un cobro diferenciado para las motos de menor cilindrada que, en su mayoría, son utilizadas para trabajar. También reconoce la disposición de las autoridades del INS para sentarse a negociar. Eugenio Badilla, integrante del comité, señala que las negociaciones se han centrado sobre el tema de la siniestralidad de los accidentes motociclísticos. Badilla detalla que "se está manejando una variable de culpabilidad para hacer el sistema más solidario, pero aún no hay nada definido, apenas se están dando los acercamientos. Se están trabajando propuestas para ver cómo se combinan los aspectos de culpabilidad, siniestralidad y solidaridad para tratar de sacar una tarifa accesible para los motociclistas”.

En el cantón de Pococí, provincia de Limón, se desarrolla la marcha contra la expansión del monocultivo de piña anunciada el día anterior. Participan vecinas y vecinos de comunidades como Llano Bonito, Sector Nueve, Santa Rosa, Aguas Frías, La Curia, Parismina y San Luis de Jiménez. Luego de marchar, las y los manifestantes se concentran en el parque de la comunidad y luego participan en la sesión del Concejo Municipal de Pococí.

Más de 200 vecinos y vecinas de los distritos de Cutris y Pocosol, en el cantón de San Carlos, bloquean el acceso a este cantón como medida de presión para que el CONAVI cumpla con el asfaltado de las vías de estas comunidades. Según denuncian, ya existe una licitación adjudicada a una empresa de la zona, sin embargo, el CONAVI no ha dado el visto bueno para el inicio de las obras. Luego de varias horas de bloqueo, las y los manifestantes acuerdan una reunión para el siguiente 9 de agosto, con Cristian Vargas, director ejecutivo del CONAVI, y Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes.

Con un pliego de 8 mil firmas, integrantes del Comité para la Defensa y el Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís solicitan a la CCSS nombrar especialistas médicos en las áreas de medicina interna, cirugía general, pediatría, anestesiología y ginecoobstetricia. En el mes de diciembre del año anterior, la CCSS intervino este hospital, sustituyendo las guardias médicas por disponibilidades médicas, lo cual causó la movilización de varias de las comunidades del Occidente que reciben atención médica en dicho hospital. Miembros del comité indican que la solicitud es que la CCSS asigne estos especialistas, en la distribución que realizará durante enero del próximo año. Enrique Pacheco, integrante del comité, señala que

se encuentran satisfechos ante este encuentro, debido a que la gerente médica de la CCSS señala que abrirán cinco plazas de especialistas para el próximo año.

Vecinas y vecinos de San Juan Sur y San Juan Norte de Corralillo, provincia de Cartago, protestan ante el aumento aprobado por la ARESEP entre diciembre y enero pasados de casi un 90% en las tarifas del servicio de bus brindado por la empresa Autotransportes San Juan de Tobosi S. A.. Según Olman Bonilla, asesor técnico de las comunidades y representante de la Red Solidaria Nacional, la ARESEP cometió un error en el cálculo de las tarifas, en donde la entidad aceptó un estudio de demanda hecho por el dueño de la empresa, en donde se argumenta que la ruta tiene una movilización media de 40 pasajeros por carrera. No obstante, Bonilla destaca que “en el folio 37 del expediente donde ellos mismos tramitaron la solicitud consta el estudio de demanda del CTP del año 2008 y dice que en esa ruta viajan 111 pasajeros por carrera, unos 100.000 al mes”.

La FEUCR presenta una petición al CTP para que se aumente la flota de unidades del servicio de la Periférica. El presidente de la FEUCR, Camilo Saldarriaga, manifiesta que a pesar de que le han hecho reiteradas instancias al CTP para que autorice mayor cantidad de buses a esa empresa, hasta el momento no ha habido una respuesta. Saldarriaga, indica a crhoy.com que la falta de autobuses “afecta académicamente porque -las y los estudiantes- no pueden llegar a sus lecciones e incluso tienen que ausentarse de sus exámenes. Percibimos una falta de voluntad. La Periférica compite con rutas bastante importantes y podría haber una serie de intereses de por medio, que están impidiendo que se habiliten los buses adicionales”.

La Confederación de Centros Agrícolas Cantonales convoca a más de 12 mil agricultores y comerciantes que venden sus productos en las ferias del agricultor, a una marcha el próximo 13 de agosto con el propósito de evitar que el CNP derogue la ley que a su criterio regula la participación de la Feria Nacional del Agricultor. Gerardo Tencio, presidente de la confederación indica que “la reestructuración del consejo requiere de una buena administración que lo pueda recuperar. No estamos en contra de la reestructuración, lo que no queremos es que deroguen la ley orgánica del CNP para convertirnos en un mercado libre y de apertura comercial”. Por su parte, el SIPROCNP responsabiliza a la administración del CNP de absorber las utilidades de la FANAL por la mala gestión financiera de los recursos.

Alrededor de 45 funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Aguirre, Puntarenas, se suman al paro de labores para exigir a las autoridades municipales el pago del reajuste salarial del año anterior y de este año, así como, explicaciones por los despidos de 25 funcionarios del municipio, y la eliminación de la Policía Municipal. “Además hay un incumplimiento a la convención colectiva, aquí tenemos una que fue denunciada por la alcaldesa municipal ante el MTSS y ellos, no están en disposición de renegociar este instrumento convencional, nosotros hemos estado en coordinación con el MTSS buscando el diálogo” indica Iris Cervantes, vocera del sindicato de la ANEP en la municipalidad.

Miércoles 7

La ANEP, con el apoyo de miembros del PAC y de la Defensoría de los Habitantes realiza una conferencia de prensa en donde solicitan declarar estado de emergencia nacional la situación del sistema penitenciario. Eugenio Polanco, experto en el tema indica en la conferencia de prensa que “hace seis años el sistema no tenía sobre población penitenciaria, que era citado por expertos latinoamericanos como modelo. La semana pasada se llegó a la cifra récord de 3.500 privados de libertad hacinados en territorio costarricense, sin solución pronta a este problema”. Por su parte, Albino Vargas detallo las problemáticas de las y los trabajadores del sistema penitenciario, “hay datos impresionantes. En estos momentos la población penal supera las 31.400 personas, en las diferentes categorías, este número hace que las personas sean atendidas por 3.125 policías penitenciarios y 1.900 personas en el segmento técnico [...] todo el personal está exhausto, la política pública ha olvidado los derechos de las personas que trabajan en las cárceles”.

Vendedores de copos del parque Metropolitano La Sabana, organizados en la UPTECO, marchan en las inmediaciones del Estadio Nacional y bloquean la vía, para exigir al ICODER regulación sobre las ventas informales en el parque metropolitano, ya que ellos cumplen con todos los requisitos para vender sus productos. Por esta razón, Alba Quesada, directora del ICODER, atiende a los manifestantes y concreta una reunión para llegar a una solución. La directora del ICODER señala: “yo entiendo el problema que tiene ustedes, pero cómo hago yo si no tengo funcionarios que fiscalicen”.

Las y los trabajadores de la Municipalidad de Aguirre, agremiados en la ANEP, los cuales se encuentran en paro de labores, se reunirán con uno de los funcionarios del MTSS, Alfonso Solórzano, con el objetivo de exponer la situación de desprotección que viven las y los empleados municipales, y los atrasos en los pagos de los justes salariales del 2012 y 2013.

Jueves 8

Desde la madrugada, vecinas y vecinos de Desamparados y Cartago bloquean la Ruta 126, la cual conecta Jericó de Desamparados con Loma Larga de Cartago, y organizan un “cacerolazo” contra las alzas en las tarifas de autobús autorizadas por la ARESEP. Verónica Hernández, una de las manifestantes, señala que se encuentran bloqueados los pasos de Río Conejo, San Juan Norte y Jericó. Para este grupo, las decisiones de la autoridad reguladora perjudican a sus comunidades, pues emiten criterios basados únicamente en la información proporcionada por la empresa autobusera. Fanny Marín, vecina de Jericó señala: “que nos devuelvan los pasajes como estaban antes. En Jericó el bus costaba ₡475 y lo subieron a ₡875, por ejemplo. No nos moveremos de aquí hasta el que el ministro nos atienda. Hay padres que pasaron a sus hijos a escuelas más cercanas porque no pueden estar costeadando ese precio de los buses todos los días”.

Apoyando las protestas de las y los vecinos de Desamparados y Cartago por las altas tarifas del transporte público, se encuentra la Red Solidaria Nacional, la cual critica la actuación de la ARESEP, en la cual invitó al empresario autobusero y a las y los usuarios a negociar el precio de la tarifa. La ARESEP se mantiene defendiendo

el proceso para el alza de más de 80% en las tarifas de la ruta. Además, informa que la empresa autobusera deberá aplicar un cobro fraccionado de acuerdo con el recorrido de cada pasajero-.

Representantes de distintos pueblos indígenas acuden a la Asamblea Legislativa para exigir que se cumpla con el compromiso que firmaron las y los diputados de diferentes fracciones hace poco más de dos meses, en donde señalaban que iban a dar prioridad a Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, la cual tiene más de 19 años sin ser tramitada. Además, Oscar Almengor, indígena bribri, señala: “vamos a mandarle una carta a la presidenta de la República. Solicitamos, la convocatoria del proyecto de ley e interceder ante las fracciones de la Asamblea Legislativa para que el proyecto se vote. Nosotros hemos hecho un análisis, de que preferimos que se vote el proyecto de ley, sea que se apruebe o no, pero que no nos tengan en esta situación, porque ya nos sentimos humillados”.

Un grupo de personas, entre ellos vecinos y vecinas de las inmediaciones del Conservatorio Castilla y usuarios de la autopista General Cañas, que han sido víctimas de asalto en las cercanías del puente del Río Virilla, conocido como “Puente de la Platina”, se organizan para recopilar todos los casos de asaltos a vehículos en la zona, con el objetivo de presentar una sola denuncia ante las autoridades judiciales.

Viernes 9

Por segundo día consecutivo, vecinas y vecinos de varias comunidades de Tobosi y Corralillo de Cartago mantienen un bloqueo en protesta por el alza de un 90% en las tarifas de autobús, aprobada por la ARESEP. Verónica Hernández, dirigente de la comunidad, indica que muchas personas han dejado sus trabajos o estudios debido a que la tarifa aumentó de ₡640 a ₡1.200 colones. Asimismo, indican que ante la falta de respuesta por parte de la autoridad reguladora continuarán con las medidas de presión.

La Red Solidaria Nacional, organización que asesora a las y los vecinos de Tobosi y Corralillo, insiste en que la ARESEP cometió un error en el cálculo del aumento tarifario, y que es inválida una negociación entre la empresa de transporte y los usuarios. El CTP se comprometió a entregar un nuevo estudio de demanda, pero aún no lo tiene listo, por su lado la ARESEP pide un estudio propio a la UCR.

El SITRAA denuncia a la gerencia general del AyA ante el MTSS, por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en la convención colectiva. El sindicato señala que existe un mal manejo de los bienes institucionales, inequidad en la distribución de las horas extras, poco personal operativo para la prestación de servicios, falta de vehículos de trabajo, el no reconocimiento de los viáticos, la no ejecución de proyectos de inversión, entre otros temas. Además, denuncian que la gerencia no ha dado autorización a la junta Directiva del sindicato para reunirse, lo cual atenta contra las libertades dsindicales. Asimismo, el secretario general del SITRAA, Álvaro Espinoza, señala que días antes enviaron un oficio al MTSS, y al AyA, para que se tomen las medidas correspondientes, no obstante no

ha habido respuesta de ninguna de las partes, por lo que presentarán un recurso formal ante la Oficina de Inspección de Trabajo.

Se crea una nueva agrupación social denominada “[1000+3] Movimiento Pacífico Revolucionario”, el cual promueve una revolución sin violencia en Costa Rica. La iniciativa organizativa está compuesta en su mayoría por jóvenes, y según uno de sus integrantes el movimiento se plantea “una revolución pacífica y solidaria que haga entender a quienes tienen el poder que este país merece que todos vivan dignamente, no sólo unos cuantos. Nos interesa socializar una alternativa para encausar y velar para que la gente haga un análisis de la situación”. Rodolfo Oreamuno, fundador del movimiento indica a crhoy.com que el nombre de la agrupación refleja al pueblo: el 1000 representa al pueblo y el +3 a la familia costarricense. Asimismo, el movimiento se plantea próximas protestas en contra de la impunidad ante los casos de defensores del ambiente perseguidos y asesinados, y en contra de la corrupción.

La ANEP por medio de una conferencia de prensa señala que la política macroeconómica del gobierno es la causante de los altos índices de desempleo. Además, cuestiona la posible influencia del gobierno sobre los informes y datos brindados por el INEC. Albino Vargas, dirigente de la organización señala que “desde la perspectiva de lucha social y sindical en que nos desarrollamos, esta es una constatación dolorosa del fracaso más que evidente de una política macroeconómica, de corte fundamentalista, misma que centrada en las ya fracasadas concepciones neoliberales, tiene a Costa Rica hundiéndose en la senda de la desigualdad a lo largo de los últimos gobiernos, incluido el actual”.

Sábado 10

Ante las altas tarifas del servicio de autobús, vecinas y vecinos de Tobosi, Jericó y Corralillo de Cartago mantienen el bloqueo de calle y aumentan la intensidad en otras zonas. Las vías bloqueadas se ubican en Jericó, Guadarrama y el Manzano (en Desamparados) y San Juan Norte, Alumbre, Río Conejo y San Cristóbal Norte (Cartago). Fanny Marín, líder comunal, manifiesta: “hacemos bloqueos a toda hora y no nos vamos a detener. Es un llamado de atención porque nos urge arreglar estas tarifas. Cerramos rutas alternas; en total, fueron ocho puntos”. Por su parte, la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, ofrece recibir al grupo de vecinos y abrir un canal de comunicación entre ellos, el MOPT y la ARESEP para buscar una salida al conflicto.

Con pancartas de “Viva la Familia”, “El aborto es un crimen” y “Los hijos son un don de Dios, no un derecho”, miles de personas marchan desde el Parque La Merced hasta la Plaza de la Democracia en el marco de la “Marcha Nacional por los Valores y el Fortalecimiento de la Familia Costarricense”. El motivo central de la manifestación es defender el modelo tradicional de la familia costarricense. Julio Gollenaga, integrante del comité organizador señala: “Gracias a Dios este movimiento no es evangélico, ni católico, ni político. Es un movimiento que está tratando de tener una Costa Rica diferente, los que amamos las familias queremos decir que queremos familias conforme al modelo de Dios”. Entre los asistentes se encuentran figuras públicas como los diputados Justo Orozco, del Partido

Renovación Costarricense, Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional, monseñor Ángel Sancasimiro y monseñor Victorino Gerardi. No obstante, uno de los organizadores de la actividad, que además es regidor de la provincia de San José, Douglas Altamirano, señala que “esta no es una actividad organizada por Justo Orozco, eso es lo que han supuesto, no vamos a permitir que la marcha se vuelva en algo político, las personas que deseen participar pueden hacerlo, pero no vamos a permitir que se den protagonismo a través de la politización de la actividad”.

El Movimiento Diversidad envía un comunicado de prensa en donde se señala que la “Marcha Nacional por los Valores y el Fortalecimiento de la Familia Costarricense” es organizada por grupos religioso. Asimismo, sostiene que esta “contiene una tónica homofóbica que promueve la discriminación hacia las familias que nosotras y nosotros representamos e incluso a otras que se escapan de la definición de familia tradicional”.

Domingo 11

La Asociación Rescate de Valores Patrióticos, la cual agrupa habitantes de los cantones de Ciudad Colón y Santa Ana, marcha contra la concesión de la Ruta 27 a la empresa española Autopistas del Sol. Las y los manifestantes se desplazan desde el peaje de Brasil de Santa Ana hacia el peaje de Escazú. Roxiris Vargas, integrante de la asociación señala: “queremos [con la marcha] despertar al pueblo para que nos acompañe en la audiencia que será a las ocho de la mañana, para defender las medidas cautelares”. También, buscan ejercer presión a los tribunales ya que el 13 de agosto, inician las audiencias de las medidas cautelares solicitadas por las y los vecinos al TCA, en contra del Estado y la empresa concesionaria Autopistas del Sol, por lo que, en caso de darse esta resolución, esperan que se levanten las agujas del peaje de Ciudad Colón y se congelen los cobros.

Ante la posible eliminación de las ferias del agricultor, como parte de las políticas de reestructuración del CNP, diversas organizaciones de agricultores anuncian una manifestación con el motivo de exigir la destitución de la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham y la del presidente ejecutivo del CNP, William Barrantes. Asimismo, los organizadores de la protesta señalan que solicitarán a la presidenta de la República que no se incluya dentro de la corriente legislativa el Presupuesto Extraordinario de 7 mil millones de colones para prestaciones del CNP, y más bien ese monto se redireccione para el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional. Manuel Porras, presidente del SIPROCNP señala que el presupuesto extraordinario de 7 mil millones de colones busca “desmantelar el CNP y dejar una estructura de 54 funcionarios como planilla final, que no tendría la capacidad de manejar las ferias del agricultor ni el programa de abastecimiento regional”. Por su lado, el presidente ejecutivo del CNP indica a crhoy.com que aún desconocen cuanto personal van a reducir, pero sí confirmó una reducción en las plazas laborales.

Lunes 12

Nuevamente, se presentan bloqueos por parte de las y los vecinos de varias comunidades de Tobosi en Cartago. El grupo que protesta contra el alza en las tarifas de autobús, autorizadas por la ARESEP, se mantiene bloqueando desde el pasado 8 de agosto. El 9 de agosto, Verónica Hernández, dirigente de la comunidad, indicó que este día retomarían los bloqueos hasta que el gobierno prestara atención a sus demandas, sin embargo, la reacción es el envío de la Policía Antimotines. Ante esta situación, las y los vecinos deciden levantar los bloqueos, y aplicar un boicot contra la empresa autobusera dejando de utilizar el servicio de transporte público.

Un grupo de vecinas y vecinos de Ostional, dedicados a la extracción de huevos de tortuga, protesta contra las organizaciones ambientalistas, demandando que se detenga la criminalización de su actividad. De acuerdo con Magdalena Vega, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, las organizaciones ambientalistas se han “aprovechado” de la muerte del conservacionista Jairo Mora, para responsabilizar a las personas que se dedican a la extracción de huevos de tortuga. Sin embargo, en el caso de Ostional, se maneja un proyecto de conservación y protección de tortugas marinas, bajo el cual la extracción se hace de manera “racional”.

La Asociación Rescate de Valores Patrióticos anuncia que ya están a la venta los billetes prósperos, con los cuales pretenden recolectar donaciones para cubrir los gastos de la demanda interpuesta por la agrupación contra el Estado costarricense y la empresa Autopistas del Sol.

Martes 13

Un grupo de productores de frijol, en su mayoría de la Zona Sur, se concentran frente a Casa Presidencial para demandar un mejor precio de compra del quintal de frijol, por parte del gobierno. Durante la protesta, los productores se reúnen con autoridades del poder ejecutivo. Gustavo Alvarado, viceministro de la Presidencia, declara que atenderán las demandas de los productores de frijol, y que durante la siguiente semana les comunicarán las fechas para próximas reuniones. Omar Palacios, productor de Buenos Aires, indica que si no se escuchan sus demandas, convocarán a un movimiento nacional.

Un importante grupo de productores agropecuarios de todo el país, marchan desde la Asamblea Legislativa hasta Casa Presidencial para manifestar su oposición a la propuesta de reforma a la Ley 8.553 que reestructuraría el CNP. De acuerdo con los productores, entre otras cosas, la reforma eliminaría las ferias del agricultor, a lo cual se oponen. Asimismo, durante la marcha exigen la salida de Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería, y de William Barrantes, presidente ejecutivo del CNP. Luego de varias horas de protesta, una delegación de las y los manifestantes es recibida por autoridades gubernamentales, entre ellas Abraham y Barrantes. Luego de la reunión, la ministra de Agricultura y Ganadería declara que no existe ningún proyecto de ley, sino una iniciativa para “mejorar las ferias del agricultor”. Agrega que si esta no cuenta con el consenso entre los productores, será descartada.

Tras una reunión entre representante de las y los agricultores que se concentraron frente a Casa Presidencial, con representantes del gobierno, estos anuncian que darán un periodo de 8 días a las autoridades gubernamentales para que no se envíe a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que pretende reestructurar el CNP. Además, solicitan a la presidenta de la República Laura Chinchilla, la destitución inmediata de la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham y del presidente ejecutivo del CNP, William Barrantes. José Oviedo, representante del Consejo Agroalimentario indica: “consideramos que la marcha fue un éxito, ya no hay más diálogo con ellos, han sido irrespetuosos, altaneros, han mal informado a la población. La idea era informar a la presidenta la situación de la población agricultora. Los dos jefes del sector agropecuario no gozan de nuestra confianza, es necesario que destituyan a la ministra y a William Barrantes”,

Miembros de la seccional Salonereros de la ANEP, brindan una conferencia de prensa donde denuncian el mal manejo de las propinas, por parte de los restaurantes para los que laboran. De acuerdo con estos, desde que se aprobó la ley que separa el salario de las propinas -monto de 10% pagado por los consumidores- en muchos restaurantes se hace un uso arbitrario de este porcentaje, repartiéndolo entre personas que no le corresponden y utilizándolo para comprar utensilios para los propios restaurantes. Por otra parte, denuncian que el MTSS insisten en que no puede hacer nada debido a que las propinas no forman parte del salario, colocándose de lado de la patronal. Ante esto, solicitan la intervención de Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes.

El Foro Nacional de Taxistas critica una resolución del CTP la cual establece que las unidades de taxi para renovar su concesión no deben tener más de 10 años de antigüedad. Gilbert Ureña, representante del Foro Nacional de Taxistas, señala que “la situación está muy difícil, nuestros ingresos han disminuido hasta un 60% del 2007 al 2013. Si esto se está por dar, estaríamos convocando de emergencia una asamblea nacional”. René Castro, ministro de Ambiente y Energía, resalta la importancia de contar con una flota vehicular moderna para disminuir las emisiones de gases contaminantes.

El SINTRAJAP anuncia posibles protestas y paro de labores en los muelles de Limón con el objetivo de exigir la renuncia del jefe de la institución Allan Hidalgo. Por esta razón, Ronaldo Blear, dirigente del sindicato, señala que emitirán una carta pública a los usuarios de los muelles para que se preparen. Blear manifiesta que “los usuarios merecen respeto ellos van a salir afectados en un asunto que no tienen nada que ver, entonces lo menos que podemos hacer nosotros es alertarlos para que no tengan mayor pérdida en los muelles pero si es definitivo que vamos a reaccionar más fuerte para solicitar la salida del presidente ejecutivo”.

Representantes de vecinos y vecinas de Santa Ana, Mora y Ciudad Colón participan en una audiencia ante los tribunales para solicitar que se interponga una medida cautelar que frene el cobro de los peajes de la vía a Caldera, mientras se resuelve el juicio contra la empresa concesionaria Autopistas del Sol y el Estado costarricense. Posteriormente a la audiencia, el TCA rechazó la petición de las y los vecinos. Ante dicha situación Vargas afirma: “somos respetuosos de la ley, y aceptamos lo que

dicta el tribunal. Ahora queda esperar el juicio de fondo que llevamos por este mismo caso”.

Miércoles 14

Luego de tomar posesión de unas tierras ubicadas en Golfito, un grupo de unos 300 campesinos, nombrados por Diario Extra como “precaristas”, se presentan ante la Municipalidad de Golfito para solicitar la entrega de dichas tierras para trabajarlas. Según reporta el medio, durante la reunión los campesinos se enteran que las tierras pertenecen a la Ston Forestal, subsidiaria de la transnacional estadounidense Ston Container Co. Ante esta situación, autoridades municipales indican que la única posibilidad es la negociación directa con los dueños de las tierras, por lo que se conforma una comisión para estudiar el caso. En medio de la reunión, se presenta Juan Pastora, propietario de las tierras, a quien una de las dirigentes de la toma de tierras pide disculpas, esto según informes del medio. Asimismo, la dirigente, de apellido Valverde, sostiene que si llega una orden de desalojo la respetarán.

La UCCAEP retira el apoyo al proyecto de Ley para la Reforma Procesal Laboral, que se discute en la Asamblea Legislativa, debido a las modificaciones que se han incurrido sobre el texto original. En una conferencia de prensa los empresarios señalan que “el sector lamenta no poder avanzar decididamente en un tema tan relevante como la celeridad de los procesos laborales y sobre los que Costa Rica sigue estando en deuda. Por ello, propone que se redacte un nuevo proyecto que agilice los procesos laborales” y añaden que “huelgas de varias semanas en los servicios de salud sin importar las consecuencias humanas, no se deben repetir”.

En una reunión del Foro Social del Caribe, donde participan alrededor de 140 personas, se acuerda solicitar a las autoridades de la CCSS una reunión para que se comprometa a realizar mejoras en la infraestructura del Hospital Tony Facio, en Limón.

Jueves 15

Un grupo de unos 100 jóvenes protesta en demanda de un terreno para la construcción de un parque de *skateboard*. La protesta toma lugar en el cantón de Golfito, donde los jóvenes bloquean durante dos horas las calles de la comunidad y luego cierran el acceso al edificio municipal. Luego de esto, amenazan con presentarse a la sesión del concejo municipal del día siguiente, si no obtienen una respuesta.

Viernes 16

Representantes de taxistas de varias zonas del país, se presentan en el edificio de Diario Extra para denunciar la falta de acciones por parte del gobierno para solucionar la situación del servicio de transporte informal. De acuerdo con estos, en todas las provincias el transporte informal ha superado en número al transporte formal, generando, entre otras cosas, un perjuicio económico para los taxistas. De la misma manera, denuncian que reciben amenazas de muerte por

parte de los transportistas informales si recogen personas en algunas zonas. Las llamadas brigadas antipiratas, sostienen, no han solucionado el problema pues se presentan esporádicamente y luego se marchan sin resolver la situación.

Un grupo de 30 mujeres integrantes del Grupo de Mujeres Emprendedoras de la Ciudadela León XIII, protesta frente al edificio del IMAS contra la eliminación del subsidio mensual de ₡100 mil colones que reciben a cambio de realizar una serie de trabajos de reciclaje y mantenimiento del entorno en su comunidad. Debido a una denuncia presentada por antiguas integrantes, el IMAS abrió una investigación que supuso el congelamiento del subsidio hasta que finalicen las indagaciones. Una de las participantes en la protesta indica que Fernando Marín, ministro de Bienestar Social y Familia, les aseguró que el subsidio seguiría otorgándose, sin embargo, mediante un correo electrónico una funcionaria del IMAS les indicó que este se mantendría congelado hasta que finalice la investigación. Jennifer Lizano, dirigente de la protesta, manifiesta que el subsidio no se lo están regalando, pues ellas trabajan para ganárselo. Asimismo, sostiene que han continuado con los trabajos, aunque no les están pagando, por lo que valoran otras medidas de protesta como el bloqueo.

Sábado 17

El Sindicato Nacional de Vendedores de Lotería confirma que el siguiente 19 de agosto protestarán contra la mala gestión administrativa de la JPS. Randall Rojas, presidente del sindicato, declara que la administración ha ignorado las solicitudes de los vendedores de lotería para sentarse a discutir una serie de temas relacionados con la lotería. Es por esto que también exigirán la destitución de la administración y la derogatoria del decreto ejecutivo firmado en 2011, en el que se autoriza que se jueguen las series completas no vendidas.

El Movimiento Florencio del Castillo, el cual aglutina habitantes de Paraíso de Cartago, busca apurar las gestiones ante el INCOFER. Por esta razón se reúnen con Miguel Carabaguiaz, presidente ejecutivo del INCOFER, en donde plantean la necesidad de que el tren arribe a la comunidad de Paraíso. Jorge Luis Moya, miembro del movimiento, argumenta sobre este encuentro: “de la reunión salimos esperanzados de que Paraíso vuelva a tener este servicio de transporte para los alrededor de 18.000 paraiseños que, de lunes a viernes, viajan a San José a trabajar”.

A partir de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que señaló que Nicaragua reclamaría la provincia de Guanacaste; habitantes de Guanacaste, apoyados por el alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez, anuncian la “Marcha por la Patria”. El alcalde nicoyano manifiesta: “somos de Costa Rica y sentimos gran orgullo de esta nacionalidad. Este señor [Daniel Ortega] ha tenido ideas poco claras en torno a este tema. Queremos decirle a él y a todos los costarricenses de que sentimos orgullo de nuestra nacionalidad y un gran arraigo a Costa Rica”.

Domingo 18

Con una marcha desde el Parque Central hasta la Plaza de la Democracia, activistas en defensa de los animales solicitan la aprobación del proyecto de ley que busca castigar el maltrato animal. Participantes en la marcha, mencionan que durante este año se ha registrado un aumento en el número de casos de maltrato animal. Por ejemplo, mencionan que el Centro de Rescate Animal del ZooAve, ubicado en Alajuela, reportó unos 4 mil casos atendidos durante el año, de los cuales un 80% correspondían a casos de maltrato animal.

El denominado Foro Alajuelense dirige una nota hacia otras organizaciones sociales para unirse en la denuncia de las recomendaciones señaladas en el “Informe de los Notables”, la mayoría de las cuales se traducirían en proyectos de ley que podrían votarse en la Asamblea Legislativa. Estos proyectos son calificados por el foro como “nefastos”, pues, entre otras cosas, buscan reformar a la PGR y a la CGR, limitar las funciones de la Sala Constitucional y permitir la remoción de diputados y diputadas por la presidencia de la República. El llamado emitido por el Foro Alajuelense denuncia los intereses de los grupos de poder político y económico en el impulso del modelo neoliberal y en beneficio de las transnacionales. Ante este panorama, “alerta” a todas las organizaciones sociales y convoca a una unidad de acción en un “Foro Nacional” para combatir cualquier intento de pasar los proyectos de ley mencionados.

Lunes 19

Alrededor de 150 a 200 vendedores y vendedoras agremiados en el Sindicato Nacional de Vendedores de Lotería se concentran en las afueras de la JPS en San José, con el motivo de denunciar la mala gestión administrativa de la JPS y exigir una rebaja en los precios de la lotería, para que esta sea accesible para los consumidores. Asimismo, demandan la derogatoria del decreto ejecutivo que permite que se jueguen las series completas no vendidas, lo cual posibilita que una parte de los premios quede en manos de la propia JPS, y denuncian las irregularidades en la lotería electrónica operada por la empresa de capital mexicano G-Tech. Randall Rojas, presidente del Sindicato Nacional de Vendedores de Lotería, indica que se presenta un primer acercamiento con las autoridades de la JPS, pero no se resuelve la situación. Mientras dure la protesta, los vendedores de lotería no ofrecerán su producto, mientras hacen un llamado a las personas para que no lo compren durante toda la semana. Pese a esto, Milton Vargas, gerente de la JPS, declara que varios vendedores de lotería se han presentado a retirar el producto.

En Caldera, Puntarenas, cerca de 200 pescadores protestan contra la decisión de la Sala Constitucional de prohibir el uso de redes de arrastre para la pesca de camarón. Meses atrás, la organización MarViva en conjunto con otras organizaciones, interpuso una acción de inconstitucionalidad para que se prohibiera el uso argumentando la insostenibilidad de la técnica y de la sobrevivencia de los pescadores artesanales, según reportes de crhoy.com. Frente a esta situación, Román Chavarría, presidente de la empresa camaronera Talmana, sostiene que la Sala Constitucional tomó una decisión mal informada, pues existen maneras de hacer “sostenible” este tipo de pesca. Álvaro Moreno, uno de los manifestantes, califica esta medida como desproporcionada e irracional y señala

que, “sin las redes de arrastre se elimina la pesca de camarón. Lo que vemos es una posición intransigente. Claro que hay daño ambiental, pero también hay soluciones con dispositivos especiales para reducir la captura de fauna de acompañamiento”.

El diario digital crhoy.com informa que los padres de Jairo Mora, conservacionista asesinado el pasado 30 de mayo, presentan la denuncia formal por el asesinato de Mora, ante la Fiscalía de Limón. La misma se dirigirá contra la organización WideCast, para la que laboraba el conservacionista, y contra los supuestos autores materiales capturados días atrás en la misma provincia de Limón. Según informes revelados por el Poder Judicial, el detonante del asesinato habría sido la denuncia por parte del mismo Mora de un supuesto acuerdo entre la organización y los saqueadores de nidos de huevos de tortugas baula, en el que se establecía un pago por trasladar los huevos extraídos hasta las instalaciones de WideCast.

Estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Corredores ubicado en el distrito La Cuesta, provincia de Puntarenas, cierran el ingreso a la institución por problemas con la directora del centro educativo. Cecilia Umaña Vargas, madre de un estudiante indica: “en los últimos años la directora Emilce Jiménez Miranda, ha venido cambiando la orientación educativa, se ha modificado en su totalidad la enseñanza de la rama agropecuaria, hay un abandono importante de la agroindustria de carnes, lácteos y pescado, cierre del matadero y lo que más nos preocupa es el deterioro de la institución y la corta de árboles”, además el estudiante Fabián Umaña Granados manifiesta que, “[...] este es el único colegio que no cuenta con gobierno estudiantil; además algunas aulas están en malas condiciones, tan es así que cuando llueve al agua se filtra y los estudiantes deben de ingeniárselas para no mojarse y seguir con las lecciones. Nos llama la atención que siendo este un colegio técnico donde nos enseñan a cuidar y preservar el medio ambiente, están cortando árboles en vías de extinción”.

Martes 20

Se cumple el segundo día de la huelga declarada por los vendedores de lotería. Para este día se esperaba una negociación entre autoridades de la JPS y representantes de los vendedores de lotería, sin embargo, la misma no ocurre, debido a la negativa de la institución de recibir a una comitiva de 10 representantes de las y los vendedores. Randall Rojas, presidente del Sindicato Nacional de Vendedores de Lotería, menciona que la comitiva estaba formada por ocho vendedores de lotería, y por Albino Vargas y Rafael Mora, de la ANEP. Entre otras cosas, los vendedores de lotería reclaman la destitución de la administración de la JPS y la derogatoria del decreto ejecutivo que permite jugar las series completas no vendidas.

Como parte de las protestas emprendidas desde el mes anterior, vecinas y vecinos de las comunidades de la Zona Sur se concentran frente a Casa Presidencial para demandar la aprobación del proyecto de ley para titular las tierras en la milla fronteriza. Durante el acto, las y los vecinos exigen una reunión con la presidenta de la República, sin embargo, es el viceministro de Seguridad quien los atiende. Este grupo señala que la problemática tiene 40 años y las y los vecinos de estas comunidades viven una inseguridad jurídica respecto de los terrenos debido a que

estos pertenecen al INDER, el cual arrienda las propiedades que están sujetas a cambios en la política de distribución de tierras.

Miércoles 21

La huelga de los vendedores de lotería suma su tercer día. Tal como sucedió el día anterior, este día se cancela una reunión pactada entre autoridades de la JPS y representantes de los vendedores de lotería. Ante esto, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, confirma que la manifestación se mantendrá.

Jueves 22

Un grupo de empleados de seguridad privada, que laboran para la empresa Seguridad Canarias S.A., se declara en huelga debido a que esta empresa no les ha cancelado el salario desde hace más de un mes. Seguridad Canarias S.A. mantiene contratos con varias instituciones públicas como la CCSS, el PANI y el INA, pese a que se encuentra moroso en el pago de las cuotas obrero-patronales, requisito indispensable para suscribir contratos en el sector público. Esta denuncia la plantean los mismos empleados, quienes indican que solicitarán la rescisión de todos los contratos ante el MTSS. Álvaro Valverde, dirigente de la ANEP, estima que la morosidad alcanza los ₡119 millones.

En el cuarto día de huelga de los vendedores de lotería, se logra un acuerdo para levantar el movimiento de protesta. Durante una reunión entre autoridades de la JPS y representantes de los vendedores de lotería, se decide: desistir de la demanda por la destitución de la administración de la JPS, solicitar una modificación del decreto ejecutivo que permite que se jueguen las series completas no vendidas, discutir propuestas sobre los planes de premios y precios de productos, presentadas por los vendedores de lotería, entre otros acuerdos. Randall Rojas, presidente del Sindicato Nacional de Vendedores de Lotería, manifiesta satisfacción con los acuerdos.

Este día toma lugar la llamada "Marcha por la Patria" convocada por autoridades municipales de Guanacaste contra las declaraciones hechas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre un posible reclamo por el territorio guanacasteco. En la marcha participan autoridades gubernamentales como la presidenta de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y ministros de varias carteras. Durante el acto que finaliza en el parque de Nicoya se firma el "Manifiesto de reconfirmación del grito de la Anexión" con el que se pretende ratificar la decisión libre de las y los guanacastecos de pertenecer a Costa Rica. Un día antes, según reportes de crhoy.com, el Foro de Guanacaste, organización que organizó y participó en las protestas del pasado 25 de julio, declinó su participación en la marcha. Ronald Vargas, vocero del foro, calificó la marcha como "gubernamental" convocada por el oficialista PLN. Asimismo, declaró que la marcha con presencia de Chinchilla favorece una "actitud xenofóbica" contra la población nicaragüense en el país. Finalmente, agregó que "Guanacaste no necesita confirmar su Anexión" y que la provincia necesita la atención del poder ejecutivo en otros temas como salud, infraestructura y empleo.

Mediante un comunicado de prensa, la UNDECA señala que es posible que este día la junta directiva de la CCSS tome la decisión de trasladar la administración de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión a la UNIBE. La denuncia de la UNDECA se inserta dentro del proceso de lucha emprendido por varias organizaciones sindicales, sociales y comunales, luego de que un conflicto entre la CCSS y la UCR, actual administradora de estos EBAIS, generara que la universidad desistiera de administrarlos. En el mismo comunicado de prensa, la UNDECA denuncia la intención de la junta directiva de la CCSS de entregar la administración de la totalidad de los EBAIS a oferentes privados. Asimismo, se señalan irregularidades en el proceso de contratación administrativa que resultaría en la decisión de entregar los EBAIS a la UNIBE.

Viernes 23

Pasado un mes de las protestas del 25 de julio en Guanacaste, un conjunto de organizaciones comunales de esta provincia emiten un comunicado de prensa en el que llaman a la administración Chinchilla Miranda a cumplir con los compromisos asumidos. En particular se citan cinco grandes temas: calidad del agua, salud, educación, infraestructura y condiciones del trabajo. Para cada uno de los temas el gobierno asumió compromisos que hasta el momento no se han cumplido, por lo que las organizaciones comunales indican que se mantendrán “vigilantes”.

Sábado 24

Un grupo de vecinas y vecinos de Desamparados y Curridabat, en la provincia de San José, organizan una marcha contra el envenenamiento de animales en este cantón de la capital. Según informa Diario Extra, semanas atrás se reportaron las muertes de dos perros envenenados en ese mismo cantón y otros 14 en el cantón de Santa Ana.

Según reporta Diario Extra, las y los integrantes del Foro Nacional sostienen una reunión en la que deciden una protesta para el próximo 26 de agosto, en el inicio de la conciliación entre el Estado costarricense y la empresa brasileña OAS, que busca terminar con el contrato otorgado a dicha empresa para la construcción de la carretera San José-San Ramón. Ricardo Araya, miembro del foro, indica que protestarán frente a la Cámara de Comercio lugar donde está prevista la reunión entre ambas partes y también en los Tribunales de Justicia para demandar una pronta respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentada por el mismo foro, meses atrás. Por su parte, Roberto Gallardo, ministro de Planificación, señala que es posible que el inicio de las negociaciones se traslade de fecha, debido a que el gobierno no ha nombrado a uno de los abogados participantes. Asimismo, indica que no existe impedimento legal para iniciar con la conciliación y menciona la “urgencia” de terminar el contrato, para iniciar con la construcción de la carretera, por otros medios.

Un grupo de tráileros costarricenses bloquean el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá, ubicado en Paso Canoas, como medida de protesta contra los abusos que el SENAFRONT panameño comete contra ellos. Según informa crhoy.com, el bloqueo solo impide el tránsito de tráileres provenientes de Panamá y que

pretenden ingresar a territorio costarricense, mientras al resto de transportes se les permite transitar.

Domingo 25

Continúa el bloqueo en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, por parte de tráileros que denuncian los abusos cometidos por el SENAFRONT de Panamá. Entre otras cosas, indica que se les detiene y se les multa por cometer "faltas leves" como transitar con llantas lisas o por no portar triángulos de seguridad. Asimismo, se les obliga a regresar a Paso Canoas y a cancelar la multa en la ciudad de David, en territorio panameño, ubicada a unos 30 km de la zona fronteriza.

Lunes 26

Desde las 10 a.m. un grupo de integrantes del Foro Nacional se concentra frente a la Cámara de Comercio para protestar contra el inicio de la conciliación entre el Estado costarricense y la empresa brasileña OAS. Este grupo se opone a la negociación que podría establecer el pago de una indemnización de hasta \$40 millones de dólares, para terminar con el contrato. Asimismo, exigen que se respete el proceso judicial entablado por el mismo foro ante el TCA que pretende se impongan medidas cautelares que impidan las negociaciones entre ambas partes. Tal como fue anunciado, días atrás por el ministro de Planificación, la reunión es pospuesta ante la falta de un abogado en representación del Estado costarricense. Pese a esto, el grupo del Foro Nacional reivindica la protesta como un acto para "hacerse escuchar". Desde este lugar, se movilizan hasta el poder judicial, para solicitar pronta respuesta a la solicitud de medidas cautelares.

Diario Extra reporta que el corte de ruta establecido por unos 500 tráileros en la frontera entre Costa Rica y Panamá se mantiene. La medida de presión, ejecutada desde el pasado 24 de agosto, se toma en reacción a los supuestos abusos que el SENAFRONT de Panamá comete contra los tráileros costarricenses, situación denunciada desde hace meses y que ha generado varias protestas de similares características. Marjorie Lizano, miembro de la CCTU, menciona que, entre otros abusos, el SENAFRONT detiene a los tráileros, luego de haber recibido el permiso de ingreso a suelo panameño, en la zona de Chiriquí donde aplican partes y decomisan las unidades hasta que estos no cancelen las multas, pese a que la legislación panameña establece un plazo de 30 días para el pago de las mismas. En declaraciones a la agencia internacional EFE, Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, responsabilizó a Costa Rica por el bloqueo, argumentando que el país no cumple con los acuerdos en materia de transportes suscritos por ambos países. Este día, los cancilleres de Costa Rica y Panamá sostienen una reunión en la que firman una serie de acuerdos que permitirían terminar con la protesta, sin embargo, Marjorie Lizano declara que esta no se ha levantado debido a que no han recibido información sobre los puntos del acuerdo. Diario Extra informa que los mismos constan de un proyecto de ley, que será enviado por el canciller costarricense, Enrique Castillo, para flexibilizar el trato fiscal sobre los tráileros panameños que ingresan a Costa Rica. Por su parte, el gobierno panameño se compromete a agilizar el pago de los partes que se impongan a los tráileros costarricenses. Horas más tarde, se reporta de un enfrentamiento entre tráileros y

miembros de la Policía Antimotines, debido supuestamente a la presencia de un oficial de policía panameño en territorio costarricense. Sin embargo, Lizano indica que la situación se logra solucionar. Por su parte, Carlos Roverssi, ministro de Comunicación, declara que los cancilleres de Costa Rica y Panamá se mantienen reunidos y solo faltaría por resolver un acuerdo sobre trámites.

En una conferencia de prensa, integrantes de WideCast Costa Rica, la FECON y la UICN, critican que el OIJ asumió como verdadera la versión dada por los supuestos asesinos del conservacionista, Jairo Mora. La versión surgió luego de que estos fueran detenidos en la provincia de Limón, y señala que Mora se oponía a un supuesto arreglo entre WideCast Costa Rica, para quien laboraba, y los extractores de huevos, que fijaba un pago a estos últimos a cambio de que los huevos extraídos fueran llevados a las instalaciones de la ONG. Didier Chacón, de WideCast Costa Rica, desmiente la versión. Por su parte, insisten en la solicitud de constituir una Comisión de la Verdad para investigar y castigar los crímenes contra ambientalistas. Mauricio Álvarez, de la FECON, menciona que "entre los antecedentes tenemos nueve asesinatos, 10 atentados directos, 15 casos de amenazas de muerte y 10 incendios a casas de activistas".

Martes 27

Se mantiene el bloqueo de los tráileros en la frontera sur del país. Unos 500 tráileres mantienen cerrado el paso entre Costa Rica y Panamá como medida de protesta contra los constantes abusos cometidos por el SENAFRONT de Panamá. Pese a que un día antes, los cancilleres de ambos países firmaron un acuerdo que finalizaría con la protesta, los tráileros deciden mantenerla pues ni siquiera se les comunicó lo firmado.

Con una marcha sobre la ruta 32, campesinas y campesinos del Caribe Norte del país, reclaman que el gobierno cumpla con el compromiso de mejorar el manejo de las tierras denominadas frágiles en esa zona, con el fin de realizar una reactivación productiva. Jesús Calderón, dirigente del movimiento, señala que las negociaciones para solucionar esta situaciónn habían dado resultado, sin embargo, el Ministerio de la Presidencia no envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, que sería conocido en sesiones extraordinarias, para solucionar el problema de la seguridad jurídica de las tierras. Asimismo, Calderón manifiesta que el gobierno tituló una gran cantidad de hectáreas en el Caribe Norte, a nombre de JAPDEVA. Según Calderón, en esta zona existiría interés para realizar exploración petrolera.

Se cumple un mes de protestas por parte de las y los vecinos de la Zona Sur que presionan por la aprobación del proyecto de ley para la titulación de las tierras en la milla fronteriza. El diario digital crhoy.com reporta que las discusiones en el congreso se mantienen detenidas, y que el proyecto permanece en la Comisión de Gobierno y Administración. Diputados del PAC responsabilizan a la fracción del PLN por obstruir la aprobación, mientras estos últimos indican que son los "más interesados" en que el proyecto se apruebe.

Importadores de autos usados de todo el país, bloquean la carretera Bernardo Soto, en el cruce de Grecia, para protestar contra una serie de medidas

implementadas por el gobierno que, según denuncian, buscan debilitar el sector hasta hacerlo desaparecer. El punto del bloqueo se toma como simbólico, pues es en ese cantón de Alajuela donde se concentran la mayoría de las ventas de autos usados en el país. En esta ocasión, la decisión del gobierno de reducir los impuestos que pagan los importadores, pero aumentar los costos de importación, causó la protesta. Para el día siguiente, se espera una reunión con el MH, sin embargo, los importadores de autos usados ratifican que continuarán con los bloqueos.

Mediante un comunicado de prensa, el Foro Nacional presenta el programa político "Lucha Popular Bicentenario" con el cual pretenden construir un movimiento social ciudadano orientado a la lucha contra el modelo de desarrollo implementado por la "clase política" costarricense durante los últimos 30 años. Marysela Zamora, integrante del foro, menciona que no se trata de un programa electoral, por el contrario, su objetivo es social, tomando como punto de partida la lucha contra la concesión de la ruta 1, que dio origen al Foro Nacional.

La UNDECA denuncia la situación precaria en la que se encuentra en el servicio de Odontología del Hospital Calderón Guardia, lo cual ha generado que desde el año 1990 el MINSA haya girado 10 órdenes sanitarias de clausura. Luis Chavarría, secretario general de la UNDECA, declara que durante este tiempo las autoridades de la CCSS no han mostrado voluntad para solucionar los problemas, particularmente en la planta física del servicio de Odontología. Asimismo, sostiene que en las denominadas listas de espera ocultas de este servicio se contabilizan unos 6 mil usuarios que esperan atención médica.

Vecinos de San Ramón, Alajuela, Palmares y Belén critican la negociación del gobierno con la empresa OAS tras el anuncio del finiquito del contrato para la construcción de la carretera San José- San Ramón, por esta razón se concentran frente a la Cámara de Comercio en Barrio Tournon, San José. Víctor Alvarado del Foro Nacional señala que "es un piquete que busca reflejar nuestra negativa a una negociación sin sentido, que únicamente es un desperdicio de recursos".

Una joven conocida bajo el seudónimo de "Aurora" apoyada por el Centro de Derechos y la Colectiva por el Derecho a Decidir, organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, demandan al Estado costarricense ante la CIDH por negarle la solicitud de tener una interrupción terapéutica de su embarazo, tras saber que su salud corría riesgo y que el feto no tenía expectativas de vida extrauterina, dado que sufría el síndrome que se conoce como abdomen pared, no obstante fue obligada a llevar a término su embarazo. En un comunicado la mujer denuncia "graves violaciones a los derechos humanos de las costarricenses. Violaciones perpetradas por los servicios de salud pública, cuya responsabilidad recae en la CCSS, pero también violaciones cometidas por el sistema de justicia". En relación con un recurso interpuesto ante la Sala Constitucional, Margarita Salas, señala que "la Sala reconoce que hay una afectación a la salud de Aurora; sin embargo, no considera hacer la instrucción a la CCSS para interrumpir el embarazo [...] Ya que dentro del país no pudo acceder a la justicia, Aurora decide elevar la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Miércoles 28

En el segundo día de bloqueos, se presenta un enfrentamiento entre los importadores de autos usados y la Policía Antimotines. Según informa Diario Extra, la situación se presenta cuando dos importadores irrespetan la directriz de no bloquear la carretera Bernardo Soto mientras se mantienen negociaciones con el gobierno. Ante esta situación, los Antimotines intervienen arrestando a los dos importadores y causando daños a varios automóviles. Por su parte, los representantes de los importadores de autos usados comunican que mantendrán una tregua mientras duren las negociaciones con el MH, pero si no se logran acuerdos retomarán las medidas de presión.

Se mantienen los bloqueos en el puesto fronterizo de Paso Canoas. Unos 500 tráileres cierran el paso en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Diario Extra informa que cerca de las 5 p.m. el corte de ruta comienza a levantarse luego de que la presidenta, Laura Chinchilla, informará sobre un acuerdo. La presidenta declara: “reconocemos la labor fundamental de los transportistas y los respaldaremos para que en el futuro puedan desarrollar su trabajo en el marco del respeto y cooperación que siempre ha caracterizado la relación entre ambos países”. Asimismo, el canciller de la República, Enrique Castillo, informa que el gobierno panameño ha dispuesto un sistema electrónico para la cancelación de las multas por parte de los tráileros, con lo cual, según Castillo, se solucionan los reclamos hechos por este sector. El medio digital crhoy.com informa que en horas de la tarde, luego de una mediación por parte de autoridades de ambos países, los tráileros deciden levantar el bloqueo, aunque no se reportan los términos de la mediación.

Un grupo denominado “Rescate del Matrimonio” impulsa una iniciativa para reformar la Constitución Política con el fin de explicitar que el matrimonio es “la unión entre un hombre y una mujer, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges, y es la base esencial de la familia”. Actualmente, el artículo 52 de la Constitución Política, establece que el matrimonio “es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”, sin hacer referencia al género de los contrayentes. La iniciativa se basa en la recolección de 150 mil firmas para luego presentar un proyecto de ley bajo la modalidad de iniciativa popular. Javier Escalante, miembro de Rescate del Matrimonio, indica que no se trata de una iniciativa religiosa, sino de una iniciativa ciudadana que “defiende” el matrimonio entre el hombre y la mujer. Igualmente, sostiene que no se trata de un rechazo a la comunidad de la diversidad sexual.

Por medio del SINDEU, trabajadoras y trabajadores de los 45 EBAIS que la UCR administra como parte del programa PAIS, en los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, declaran que el próximo 19 de setiembre iniciaran un paro indefinido. Según relata la secretaria general del SINDEU, Rosemary Gómez, esta protesta se da con el motivo de rechazar la concesión de los servicios de los EBAIS a partir del 14 de febrero del 2014, por lo que solicitan que el cartel de licitación sea retirado y que los centros de salud sea administrados por la CCSS o que continúe la UCR administrándolos con un presupuesto apto. Además, denuncian que en el cartel de licitación se deja por fuera nueve EBAIS, pues se están

concesionando 36 de los 45, lo que significa que habrá una reducción en los EBAIS que atienden la población de los tres cantones.

Jueves 29

Diversos grupos organizados de Golfito, en Puntarenas, emiten un comunicado de prensa en el que informan la convocatoria a una protesta para el próximo 4 de setiembre. La misma se dirigiría contra la mala gestión en la Municipalidad de Golfito. Entre los firmantes, según reporta Diario Extra, se incluyen sectores cooperativos, empresariales, comunales y partidos políticos, entre otros. Asimismo, en el documento se consigna que la mala gestión obedece a la incapacidad de las autoridades municipales para manejar la crisis financiera del municipio, pese a que este cuenta con una de las partidas presupuestarias más importantes.

Un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de San Blas, ubicada en Cartago, cierra las calles de Tierra Blanca en protesta por los problemas con el abastecimiento de agua. Según denuncian, han sostenido varias reuniones para atender la situación, la cual se soluciona durante algunas semanas pero luego regresa.

Viernes 30

80 familias vecinas de la Urbanización Linda Vista, ubicada en La Guácima, Alajuela, bloquean un punto de la ruta 27 para exigir solución a su problemática de abastecimiento de agua. Una de las dirigentes de la protesta, explica que estas 80 familias adquirieron los lotes a una persona de apellido Murillo, quien, en ese momento, no les informó que no tendrían acceso a los servicios públicos básicos. Pese a esto, lograron una negociación con la Municipalidad de Alajuela en la que acordaron que se les suministrarían algunos de estos, entre ellos el agua. Sin embargo, han experimentado problemas de abastecimiento en la única paja de agua con la que cuentan las 88 casas.

Unos 500 trabajadores y trabajadoras del AyA, afiliados al SITRAA, se declaran en huelga hasta que no se les cancele el salario quincenal. Según informan, un error en el sistema informático, el cual se ha presentado en otras ocasiones, provocó que no se giraran los pagos. Javier Vargas, gerente general del AyA, califica la protesta como "innecesaria" pues aunque la institución cancela los salarios los días 28 de cada mes, no existe una normativa que los obligue a hacerlo ese día, por el contrario la legislación vigente establece el último día de cada mes como plazo máximo.

Sábado 31

Una representación de los pueblos indígenas de la Zona Sur, en conjunto con campesinos de la misma zona, denuncian ante la Comisión Legislativa de Puntarenas, supuestas irregularidades en la asignación de los fondos del FONAFIFO. Aunque no se detalla sobre la denuncia, el medio digital crhoy.com informa que la comisión decide iniciar una investigación, que incluiría una

intervención del fondo y un llamado a comparecer a los responsables del mismo. Según denuncian, las comunidades indígenas se tratarían de unos ¢100 millones de colones que no se están asignando correctamente.

Glosario de siglas

ACOFEMED	Asociación Costarricense de Escuelas y Facultades de Medicina
ANDIGAPA	Asociación Nacional de Distribuidores del Gas
ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
AyA	Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados
CANAPEP	Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
CCTU	Cámara de Transportistas Unitarios de Costa Rica
CGR	Contraloría General de la República
CICR	Cámara de Industrias de Costa Rica
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNC	Consejo Nacional de Concesiones
CNP	Consejo Nacional de Producción
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad
CTP	Consejo de Transporte Público
EBAIS	Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
FANAL	Fábrica Nacional de Licores
FECON	Federación Ecologista de Costa Rica
FEUCR	Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
FONAFIFO	Fondo de Financiamiento Forestal
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
INCOFER	Instituto Costarricense de Ferrocarriles
INCOP	Instituto Costarricense de Puertos
INDER	Instituto de Desarrollo Rural
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INS	Instituto Nacional de Seguros
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
JPS	Junta de Protección Social
MH	Ministerio de Hacienda
MINSA	Ministerio de Salud
MOPT	Ministerio de Obras Públicas
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PAC	Partido Acción Ciudadana

PANI	Patronato Nacional de la Infancia
PGR	Procuraduría General de la República
PLN	Partido Liberación Nacional
PUSC	Partido Unidad Social Cristiana
SENAFRONT	Servicio Nacional de Fronteras de Panamá
SINTRAJAP	
SIPROCNP	Sindicato Pro- Trabajadores del Consejo Nacional de Producción
SITRAA	Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
SOA	Seguro Obligatorio de Automóviles
TCA	Tribunal Contencioso Administrativo
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNDECA	Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
UNIBE	Universidad de Iberoamérica
UPTECO	Unión de Pequeños Comerciantes

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR)

Coordinación: Alejandro Alvarado Alcázar.

Relevamiento y sistematización a cargo de Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez.

Fuentes: Diario Extra, La Nación y crhoy.com.